



Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3

Registro nro.: 935/25

///la ciudad de Buenos Aires, a los días 9 del mes de septiembre del año dos mil veinticinco, se reúnen los señores jueces de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal doctores Carlos A. Mahiques -Presidente-, Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky bajo la presidencia del primero de los nombrados, asistidos por la secretaria actuante, para resolver en la causa **CPE 519/2019/TO2/1/CFC3** del registro de esta Sala, caratulada: **"VÁZQUEZ, Ángel y otro s/ recurso de casación"**, con las intervenciones del representante del Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara, Dr. Javier Augusto De Luca, de la Dra. María José Balestretti, por ARCA como querellante y de los defensores particulares doctores Guillermo y Santiago Vidal Albarracín, ambos por la representación de Ángel Vázquez y Anceres S.A.

Habiéndose efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden: Gemignani, Borinsky y Mahiques.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

El señor juez **doctor Juan Carlos Gemignani** dijo:

PRIMERO

I. El Tribunal Oral en Lo Penal Económico N° 3 de esta ciudad, en fecha 26 de marzo de 2025, resolvió: **"I.- DECLARAR EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL y, en consecuencia, SOBRESEER a ANCERS S.A. (CUIT N° 30-557655-8, con domicilio fiscal en la calle Oliden 1870 de esta ciudad), en orden a la presunta comisión del**



delito previsto en el art. 9° de la ley N° 24.769, en relación a los hechos que surgen de los requerimientos de elevación a juicio obrantes a fs. 1055/1065 y 1394/1401 (art. 59, inc. 6, segundo supuesto del CP y arts. 336, inc. 1 y 361 del CPPN). **II.- DECLARAR EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL** y, en consecuencia, **SOBRESEER** a Ángel VÁZQUEZ (titular del DNI Nro. 4.078.150, argentino, nacido el 31 de marzo de 1932 en esta ciudad, hijo de Andrés Vázquez y de María Carmen Pérez, casado, de ocupación Presidente de la firma ANCERS S.A., con domicilio en la calle Navarro 4647, planta baja "1" de esta ciudad), en orden a la presunta comisión del delito previsto en el art. 9° de la ley N° 24.769, en relación a los hechos que surgen de los requerimientos de elevación a juicio obrantes a fs. 1055/1065 y 1394/1401 (art. 59, inc. 6, segundo supuesto del CP y arts. 336, inc. 1 y 361 del CPPN)..."

Contra dicha decisión, la letrada apoderada de la querella (ARCA), interpuso recurso de casación, el que fue concedido por el a quo y mantenido en esta instancia.

En esta última oportunidad la querella renunció a los plazos procesales, renuncia a la que no se opuso el Fiscal General ante esta cámara.

II. En su presentación, la recurrente se agravia de que el a quo habría aplicado erróneamente el artículo 59, inciso 6°, del Código Penal –referido a la reparación integral del daño– y el Régimen Penal Tributario, incurriendo así en una violación a la garantía del debido proceso y de defensa en juicio, consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional.

En tal sentido, sostiene que el magistrado sentenciante incurrió en error en la interpretación de los supuestos en los





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3

cuales resulta procedente la aplicación del instituto de la reparación integral, omitiendo considerar el principio de especialidad consagrado en el artículo 4° del Código Penal y en el artículo 16 del Régimen Penal Tributario.

Destaca que, al haberse aplicado en el caso el artículo 59, inciso 6°, del Código Penal –que impone menores exigencias para la extinción de la acción penal–, se desvirtuó el contenido del artículo 16 de la Ley 24.769.

Asimismo, señala que el perjuicio derivado de la comisión de un delito tributario no se limita exclusivamente al importe defraudado, sino que comprende también el normal desenvolvimiento del flujo de ingresos y egresos de la hacienda pública, toda vez que la reparación integral del perjuicio excede el plano individual, afectando el funcionamiento mismo del Estado.

Agrega que, contrariamente a lo sostenido por el *a quo*, en autos no se configuró la reparación integral, toda vez que permanece impaga la posición fiscal 03/2014. La falta de cancelación de dicha obligación –aun cuando, según expone la sentencia, no constituyó objeto del proceso– evidencia claramente que en el caso no puede afirmarse que el daño haya sido integralmente reparado, ya que el perjuicio ocasionado por la empresa no ha sido subsanado en su totalidad.

Remarca, asimismo, que los desembolsos realizados por la imputada ya contaban con planes de facilidades de pago, dispuestos por la ley y reglamentados por ARCA, por lo que fundar en tales planes la acreditación de una reparación integral resulta estéril.



Cuestiona, además, que el pago de las sumas adeudadas en materia tributaria y previsional pueda ser considerado como una reparación integral del perjuicio ocasionado por los imputados. Alega que, en el caso, la víctima debió conformarse con el pago –tardío– de los aportes, lo que, a su entender, impide considerar configurada la reparación integral contemplada en el artículo 59 del Código Penal, toda vez que el pago realizado debió contemplar otros aspectos del perjuicio causado, tanto materiales como inmateriales.

De este modo, afirma que, en el caso, se vio afectado el bien jurídico protegido –Seguridad Social–, ya que los delitos cometidos respecto de los recursos destinados al sistema poseen una relevancia tanto social como individual, comprometiendo la integración de los fondos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, basado en principios de dignidad humana, libertad, solidaridad, integridad e igualdad.

Sostiene que el propósito del legislador al sancionar los delitos previstos en la Ley Penal Tributaria no fue únicamente proteger el patrimonio o erario público, sino también resguardar el carácter social del sistema, de manera tal que no resulta suficiente el ingreso de los montos adeudados para considerar satisfecha la reparación integral del daño causado.

En definitiva, entiende que las condiciones de cancelación de las obligaciones correspondientes a la Seguridad Social por los períodos investigados en autos no constituyen, en modo alguno, una reparación integral del perjuicio, en los términos previstos por el artículo 59, inciso 6°, del Código Penal.





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3

III. Que en la oportunidad prevista en los arts. 465, cuarto párrafo, y 466 del C.P.P.N., la defensa renunció a los plazos procesales y la fiscalía no se opuso.

IV. Que superada la etapa prevista en los arts. 465, último párrafo, y 468 del C.P.P.N., ocasión en la que la defensa presentó breves notas, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas.

SEGUNDO

I. El recurso de casación interpuesto es formalmente admisible, toda vez que la sentencia recurrida es definitiva (art. 457 del C.P.P.N.), la parte recurrente se encuentra legitimada para impugnarla -art. 460 del C.P.P.N.-, los planteos efectuados encuadran dentro de los motivos previstos por el art. 456 del C.P.P.N., y se han cumplido los requisitos exigidos por el art. 463 del citado código ritual.

II. Superado el test de admisibilidad del recurso, corresponde recordar que no es esta la primera oportunidad en que debo pronunciarme en el marco de las presentes actuaciones.

En efecto, ya me he expedido en el incidente CPE 519/2019/TO2/1/CFC1, resuelto el 9 de febrero de 2022, registro 6/22, oportunidad en la que mis colegas de Sala, por mayoría, resolvieron la inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto por la querella ARCA contra la suspensión de la acción penal seguida contra Ángel Vázquez y Anceres S.A., en virtud de la aplicación del artículo 59, inciso 6°, del Código Penal, conforme lo había dispuesto el magistrado de la anterior instancia. Por mi parte, consideré que el remedio procesal era



admisible y que correspondía fijar audiencia de conformidad con lo dispuesto por los art. 454 y 455 del CPPN. Esta resolución constituye el antecedente directo de la decisión que en esta ocasión se somete a estudio.

Asimismo, intervine en el antecedente más reciente, incidente CPE 519/2019/TO4/9/CFC2, resuelto el 6 de julio de 2023, registro 766/2023, en el que, nuevamente, se había dispuesto la suspensión de la acción penal seguida contra Ángel Vázquez y Anceres S.A., respecto de la retención de aportes con destino al Sistema Único de Seguridad Social (SUSS) -Seguridad Social y Obras Sociales-, correspondientes a un determinado número de períodos fiscales.

En dicho marco, y en lo que aquí interesa destacar, coincidí con la posición sostenida por el representante de la querella en cuanto a que la sentencia recurrida presentaba deficiencias, toda vez que el instituto aplicado resultaba, a mi entender, de imposible aplicación al caso sometido a estudio (cfr. causa CCC 4777/2014/TO1/CFC1 "DOMINGUEZ, Pablo Rafael s/ recurso de casación", rta. 14/10/22, reg. 1356/22).

Más aún, manifesté que el artículo 59, inciso 6°, del Código Penal -en cuanto establece dicho instituto- resultaba, en mi criterio, inconstitucional (cfr. mi sufragio en la causa CCC 25020/2015/TO1/CFC1 "VILLALOBOS, Gabriela Paola" rta. 29/8/17, Reg. N° 1119/17 de la Sala IV de este cuerpo y más recientemente en la causa FSM 6158/2013/TO1/CFC1 "Núñez, Diego Matías", rta. 17/8/2022, Reg. N° 1087/2022 Y CPE 575/2009/TO1/CFC4 "MATISIC, Ricardo", rta. 28/11/24, reg. 1554/24 de esta Sala III, entre muchas otras).





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3

Todas estas circunstancias resultan plenamente aplicables a la cuestión que, en esta oportunidad, se encuentra sometida a decisión.

En efecto, en dichos precedentes consigné que la coexistencia social, es decir, el tejido social, no puede ser considerado un estado, en relación a su esencia matriz, pues una sociedad no se constituye a través de la inviolabilidad (o en el reconocimiento mutuo) de derechos subjetivos, sino que se construye mediante la comunicación entre personas cuyos intereses, a consecuencia de su continua exposición a distintas esferas, resultan necesariamente expuestos a peligros.

Con relación a estos riesgos constantes y, a fin de que los contactos sociales puedan subsistir, resulta necesario que el individuo pueda tener confianza, esto es pueda proyectar su vida con la esperanza de que no han de producirse de parte de los demás, comportamientos arbitrariamente lesivos de las condiciones sociales.

En este sentido, *"...Los sistemas sociales institucionalizan expectativas estabilizadas contrafácticamente, objetivas, generalizadas, según las cuales el hombre puede orientarse, regirse, y que entonces forman parte de las condiciones de la coexistencia social (e incluidas en ellas: la personalidad humana)..."* (cfr. Lesch, Heiko Hartmut: "El concepto de delito -Las ideas fundamentales de una revisión funcional-"; traducción efectuada por el suscripto, Ed. Marcial Pons; Buenos Aires; 2016; p. 206).



Así, en contra de la función de dirección del comportamiento que la doctrina tradicional asigna a las normas, éstas cumplen exclusivamente la función de asegurar las expectativas sociales: *"La norma de derecho, asegura lo que se puede esperar, y qué aspectos de los comportamientos defraudatorios no se deben aprender y deben adaptarse a la norma, y establece que las expectativas deben mantenerse firmes incluso contra los hechos (contrafácticamente)"* (Ibíd. pág. 206). Es decir, la expectativa de comportamiento conforme a la norma debe afirmarse vigente mediante la pena, aún frente a los injustos cometidos.

En síntesis, las normas que dotan de contenido al derecho penal no buscan dirigir un comportamiento conforme a derecho, sino que el fin de estas es proteger a los individuos frente al fraude generado por la conducta, en cuanto que la misma no resulta ser para el caso, la que hubiera resultado pertinente. En este sentido, las normas funcionan como patrones orientadores sobre la organización de la conducta que se espera, y esa organización presupone un consenso que dota de validez a aquellas expectativas.

La consecuencia que se deriva de la infracción a la norma es la búsqueda de la restitución de las condiciones del derecho, y esa es la única compensación material posible del daño para el ámbito penal y que se realiza a través de la afirmación de la culpabilidad del implicado.

En la evolución histórica ha habido una confusión, que resulta particularmente trascendente para el tema de la presente causa. Se trata de la confusión que deviene de considerar a la lesión a un (objeto de) bien jurídico como elemento específico





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3

para cualificar el hecho como injusto, tanto para el derecho civil como para el derecho penal.

Recuérdese, que la "lesión jurídica civil" consiste en una agresión a una esfera jurídica ajena, a un especial o subjetivo derecho. En cambio, la "lesión jurídica penal" se constituye como una lesión al derecho objetivo, al derecho en sí.

El injusto penal, a diferencia del injusto civil, debe ser restaurado en su ámbito funcional de generalización a través del tratamiento del suceso defraudatorio. En este sentido, la compensación del delito implica la restitución de la vigencia de la norma, mediante la aplicación de la pena compensatoria de la culpabilidad que en el hecho exhiba el responsable.

De lo expuesto se desprende entonces que *"Un sistema penal funcional, orientado según el principio de la compensación de la culpabilidad por el hecho y que con ello pretende ser un genuino sistema jurídico penal, no puede entonces establecerse con relación al contenido del deber, sino sólo con relación al símbolo del deber mismo, esto es, con relación a la expectativa de que determinadas reglas elementales de relacionamiento sean obligatorias"* (Ibíd. pág. 212).

III. Ahora bien, resulta pertinente recordar que es doctrina del Alto Tribunal que *"...la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, pues las leyes dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos en la Carta Fundamental gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente, y obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente*



cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable..." (Fallos: 226:688; 242:73; 300:241; 1087; causa E. 73. XXI, 'Entel c/Municipalidad de Córdoba s/sumario', fallada el 8 de septiembre de 1987, entre otros). Por otra parte, debe demostrarse de qué manera la disposición contraría la Constitución Nacional (C.S.J.N., Fallos: 253:362; 257:127; 308:1631; entre otros). Sabido es que resulta ajeno al control judicial el examen de la conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus atribuciones (Fallos 253:362, 257:127, 300:642, entre otros).

Es así que la potestad de incriminar y establecer penas, y soluciones alternativas a las mismas, que el legislador constituyente le otorgó al Congreso Nacional constituye una facultad exclusiva y excluyente de dicho órgano de gobierno y escapa, en principio, a la revisión judicial, salvo casos de manifiesta y grosera violación de principios constitucionales esenciales.

Entonces bien, a la luz de la postura tradicional y actual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en punto a que el control de constitucionalidad de las normas debe realizarse de oficio, esto es, que los jueces se encuentran facultados a declarar la inconstitucionalidad de oficio cuando exista una grave afectación de los derechos y garantías establecidos en la Ley Fundamental, siempre y cuando se respete el principio de congruencia y sin la exigencia de una petición expresa de la parte interesada (confr. 329:5903 y 332:1078, 343:345 y más reciente CSJ 520/2001 (37-P)/CS1 "Perret, Liliana"; entre otros), me encuentro facultado en el *sub lite* a analizar la validez constitucional del instituto procesal que se halla en juego en





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3

autos, el que se encuentra contemplado en el artículo 59 inc. 6 del Código Penal.

Recuérdese, a los fines de resolver la cuestión traída a estudio, que la norma que se pretende aplicar al caso de autos, expresa que: *"La acción penal se extinguirá: [...] 6) Por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes"*; a mi entender, el artículo señalado es consecuencia de la confusión, mencionada al comienzo de mi ponencia, entre dos conceptos de injustos bien diferenciados: el injusto civil y el injusto penal.

Esto pues, el injusto penal no conforma ninguna lesión de un (objeto de) bien jurídico, sino que constituye sólo una agresión al deber mismo.

El injusto penal, entonces, definido en el sentido del principio de culpabilidad por el hecho, como compensación de la perturbación social, no puede ser legitimado sin la función social, y esa función social, justamente por su condición de tal, no puede ser objeto de tratamiento satisfactorio, con exclusiva atención a la voluntad de las partes involucradas.

En el presente caso, el fraude a la expectativa para este tipo de delitos (recuérdese que en el supuesto de autos se requirió la elevación de la causa a juicio de Ángel VÁZQUEZ y la firma ANCERS S.A. por haber omitido depositar en término los aportes retenidos a sus empleados en relación de dependencia en concepto de aportes con destino al Régimen Nacional de la Seguridad Social y Obras Sociales -periodos 01/2014, 02/2014,



05/2014, 06/2014, 07/2014, 08/2014, 09/2014, 10/2014, 11/2014, 12/2014 y 05/2016-) debe ser restaurado por el obrar diligente del representante del Ministerio Público Fiscal "que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad" (cfr. art. 120 de la CN y, en el mismo sentido, el art. 1 de la Ley 27.148).

Es decir, la norma aplicada resulta, desde mi punto de vista, inaplicable al caso puesto que prevé una alternativa de resolución del conflicto exclusiva del derecho civil, pretendiendo una aplicación analógica y general para un caso de derecho penal.

Dicha pretensión, insisto, parte de la errónea interpretación de entender que la lesión jurídico penal consiste en una agresión a una esfera jurídica ajena la cual podría ser restituida mediante una compensación material del daño, cuando lo que debería derivarse de la infracción a la norma penal, a la lesión de un derecho objetivo, es la restitución del derecho en sí, el cual no puede ser reparado por un simple acuerdo entre partes sino a través del tratamiento del suceso defraudatorio, puesto que lo que la compensación del delito reclama es la restitución de la vigencia de la norma, a través de la afirmación de la culpabilidad por el hecho.

Cabe recordar que en las sociedades organizadas según el principio de la libertad, esto es, en aquellas que dejan librado a cada quien la organización de su vida, sus bienes etc. -en orden a lo cual no pueden caber dudas sobre la Argentina-, el correlato necesario a ello está constituido, entre otras prestaciones estatales, por el diligente proceder del Ministerio





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3

Público Fiscal, toda vez que él resulta beneficiario, según el mandato constitucional de legalidad-seguridad del derecho humano de todos los argentinos a vivir en libertad según los modelos de la ley, con la garantía de que si esa libre organización personal fuera cercenada mediante la agresión de un con-ciudadano, definido como delito, el mismo habrá de ser pertinentemente sancionado.

En efecto, prescindir, como en el caso, de la actividad del titular de la acción penal representa un grave ataque al fin del sistema penal y no puede, de ningún modo, ser homologado ya que los principios de legalidad procesal y de oficialidad, que rigen la esencia misma de nuestro régimen procesal nacional resultan materialmente incompatibles con el instituto que se pretende aplicar.

Dicha inconsecuencia no puede sino subsanarse en esta sede ya que, de lo contrario, se estaría generando incerteza sobre la efectiva vigencia de la protección estatal y sobre la organización de la vida social según la definición de la ley, esto es, anomia.

No obsta a lo aquí sostenido que la Comisión Bicameral de monitoreo e implementación del CPPF haya puesto en vigor el artículo 34 del Código Procesal Penal Federal, que regula de modo específico y procesal el instituto de la Conciliación.

En efecto, al resolver en la causa CFP 1495/2016/TO2/19/CFC2 del registro de esta Sala III "Banegas, Mariana s/recurso de casación", rta. 8/5/25, reg. 330/25, en síntesis, distinguí la conciliación prevista en el artículo 34 del Código Procesal Penal



Federal de la reparación integral del daño contemplada en el artículo 59, inciso 6, del Código Penal, señalando que esta última -como ya expuse- resulta inconstitucional por vulnerar el principio de legalidad, al incorporar al ámbito penal soluciones propias del derecho civil sin establecer límites o requisitos claros de procedencia, confundiendo la lesión penal -que afecta la vigencia de la norma en su dimensión objetiva y social- con la lesión civil, referida al interés subjetivo de una persona determinada.

En cambio, consideré que la regulación de la conciliación en el artículo 34 del CPPF resulta más razonable, adecuada y respetuosa del mandato constitucional, por cuanto restringe su procedencia a un universo de derechos personalísimo y reducido de delitos de escasa gravedad -culposos sin resultado de muerte o lesiones gravísimas, y patrimoniales sin violencia grave contra las personas- y cuyo daño material es cuantificable. En los casos de mayor trascendencia, como he expuesto, la pena resulta indispensable por su valor simbólico, al reafirmar la vigencia social de la norma.

Por lo demás, cabe destacar que su aplicación se encuentra garantizada al someterse siempre al control y disponibilidad exclusiva del Ministerio Público Fiscal, conforme los artículos 30 y 34 del CPPF, asegurando así la racionalidad y previsibilidad del sistema punitivo.

En definitiva, y conforme lo desarrollado precedentemente y coincidiendo con el recurrente, considero que la sentencia impugnada adolece de vicios sustanciales que la tornan nula, en tanto ha aplicado al caso el instituto de la reparación integral del daño previsto en el artículo 59, inciso 6°, del Código Penal,





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3

a mi entender, de imposible aplicación y cuya inconstitucionalidad corresponde declarar. Ello así, por cuanto, como se señaló, dicha norma proyecta en el ámbito penal mecanismos propios del derecho civil, sin delimitar con precisión sus supuestos de procedencia, en franca violación al principio de legalidad (art. 18 CN).

IV. Por lo expuesto, corresponde: **HACER LUGAR** al recurso de casación interpuesto por la letrada apoderada de la querella (ARCA), sin costas, **ANULAR** la sentencia puesta en crisis, **declarar la inconstitucionalidad** del artículo 59 inciso 6° del CP al caso y **REMITIR** las actuaciones al tribunal *a quo* a fin de que se continúe con la sustanciación del expediente en los términos apuntados.

Así voto.

El señor juez **doctor Mariano Hernán Borinsky** dijo:

Resulta oportuno recordar que Ángel Vázquez y la firma ANCERS S.A. se encuentran imputados por la falta de depósito oportuno de los aportes previsionales retenidos a sus empleados, conforme al detalle que se expone a continuación:

Período	Total
01/2014	274.341,95
02/2014	196.960,37
05/2014	130.422,22
06/2014	194.740,94
07/2014	201.396,83
08/2014	365.844,17
09/2014	244.349,10
10/2014	227.625,11



11/2014	250.435,87
05/2016	186.293,43

Así, las referidas conductas fueron subsumidas en las previsiones del art. 9 de la ley 24.769, atribuyéndose su comisión a Vázquez a título de autor en los términos del art. 45 del Código Penal; mientras que, respecto de ANCERS S.A., la imputación se formuló conforme a lo dispuesto en el art. 14, segundo párrafo, de la mencionada ley penal tributaria.

Cabe destacar que, tal como lo ha expuesto el distinguido colega que lidera el Acuerdo, doctor Juan Carlos Gemignani, las presentes actuaciones han sido objeto de anterior tratamiento por esta Cámara.

En efecto, reviste particular relevancia la decisión de esta Sala de fecha 9 de febrero de 2022 (Reg. N° 6/22), toda vez que, con una integración parcialmente distinta y sobre los mismos hechos, se declaró inadmisibile el recurso de casación interpuesto por la querella contra la sentencia del tribunal oral que dispuso la suspensión de la acción penal seguida contra Ángel Vázquez y ANCERS S.A. en los términos del art. 59 inc. 6 del Código Penal.

Dicho pronunciamiento también fue recurrido por el organismo recaudador y, habiéndose concedido el recurso extraordinario por esta Cámara, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante resolución del 19 de diciembre de 2024, lo desestimó en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

En consecuencia, se encuentra firme la resolución del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 que hizo lugar a la solicitud formulada en los términos del art. 59 inc. 6 del CP y suspendió la acción penal contra Ángel Vázquez y ANCERS S.A.





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3

hasta la cancelación íntegra de las cuotas correspondientes al plan de facilidades N° N807016 (60 cuotas).

Con posterioridad a dicho fallo, el contribuyente abonó las cuotas del referido plan de pagos, cancelando de esa manera las obligaciones que integran el objeto material del presente legajo, de acuerdo con los requerimientos de elevación a juicio formulados por la fiscalía el 24 de mayo de 2019 y por la querella el 28 de febrero de 2020.

No puede soslayarse que la cancelación de la deuda no se encuentra controvertida por las partes -según surge del dictamen del Ministerio Público Fiscal ante la instancia anterior y de la resolución impugnada-.

De esa manera, se advierte que, la condición a la cual se supeditó el proceso mediante resolución firme, se encuentra cumplida y no es objeto de controversia.

Sentado lo expuesto, considero que la resolución recurrida, cuenta con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes (*Fallos* 302:284; 323:629 y 325:924, entre otros), a la vez que no presenta fisuras de logicidad y resulta una derivación razonada del derecho vigente con ajuste a las particulares circunstancias de autos.

Las discrepancias valorativas expuestas por la recurrente, más allá de evidenciar la existencia de una fundamentación que no comparte y tampoco rebate, no configuran un agravio fundado en la doctrina de la arbitrariedad (*Fallos* 306:362 y 314:451, entre muchos otros), en los graves defectos del pronunciamiento (*Fallos*



314:791; 321:1328; 322:1605), o en alguna cuestión federal (Fallos 328:1108).

Por todo ello, propongo: I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la parte querellante -ARCA-, sin costas (arts. 530 y 531 *in fine* del C.P.P.N.). II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.

El señor juez **Carlos A. Mahiques** dijo:

I. Conforme surge de las constancias del expediente, las maniobras ilícitas imputadas ya descriptas en el voto de los colegas que me anteceden en el orden de votación fueron calificadas en los requerimientos de elevación bajo las previsiones del art. 9 de la ley 24.769.

Radicadas las actuaciones ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico nro. 3, la defensa petitionó la suspensión del proceso en los términos del art. 10 de la ley nro. 27.541 (según ley nro. 27.562) toda vez que la firma ANCERS S.A. se había acogido a la moratoria dispuesta por esa norma a fin de regularizar la deuda vinculada a los hechos objeto de autos (cfr. fs. 1/13 y 35/67).

La querella se opuso a esa posibilidad dado que esa empresa registraba saldos impagos en concepto de aportes al Régimen Nacional de las Obras Sociales (cfr. fs. 69/70). Frente a ello, la sociedad imputada aportó los comprobantes que acreditaban la cancelación de esa deuda el 25 de noviembre de 2020 mediante pagos bancarios (cfr. fs. 73/93).

En ese contexto, corrida una nueva vista a la parte querellante, manifestó que esas cancelaciones se realizaron por fuera de lo regulado por la ley de moratoria nro. 27.541, lo que obturaba a la concesión del beneficio. Sustanciado el planteo defensivo, la representante del Ministerio Público Fiscal propuso





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3

encarrilar la petición bajo las previsiones del art. 59 inc. 6 del CP, a lo que nuevamente se opuso la querella. Ello, en tanto la parte previsional de la deuda objeto de las presentes actuaciones se encontraba en un plan de pagos y no era posible entonces extinguir la acción penal en los términos propuestos. Agregó a ello que fueron reiterados los incumplimientos de pago de aportes previsionales por parte de ANCERS SA y que la ley penal tributaria no solamente persigue el cobro de los tributos adeudados, sino que también tiene un alcance mayor vinculado con la finalidad de política criminal en relación al cumplimiento debido del pago de los tributos.

El a quo, el 23 de diciembre de 2020, resolvió hacer lugar a la solicitud efectuada en los términos del art. 59 inc. 6 del C.P. -según ley 27.147- y, en consecuencia, suspender la acción penal seguida contra Ángel Vázquez y ANCERS SA, en relación a los hechos imputados hasta tanto se abonasen las 60 cuotas del plan de facilidades nro. N807016 al que se acogió la contribuyente en los términos de la ley 27.562.

En relación a la posibilidad de aplicar la reparación integral al caso concreto señaló que esa causal de extinción "...ha sido traída a consideración de este Tribunal en virtud de un acuerdo entre la defensa y la representante el Ministerio Público Fiscal y por ello, debe ser considerada a la luz de las enunciaciones efectuadas por los actores involucrados en el proceso directamente interesados en la reparación del perjuicio causado en el hecho objeto de las presentes actuaciones".



Sumado a ello, en cuanto a la oposición de la querella, indicó que "...aceptar la imposibilidad de aplicar el instituto previsto en el art. 59 inc. 6 del C.P., con la mera invocación de la falta de operatividad y la invocación de la finalidad político criminal del régimen penal tributario constituyen argumentos incongruentes y confusos para el contribuyente. Aunado a ello, y en el caso concreto ocurre, cuando la oposición de la víctima (querellante) se sostiene en argumentos que descuidan la pretensión recaudatoria fiscal que el ofrecimiento trae aparejado y sin perjuicio que ello no implica la renuncia de acciones de cobro, ya que la deuda de aportes con destino al Régimen de la Seguridad Social están siendo abonados mediante un plan de facilidades de pago y la deuda de aportes con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales fue cancelada en su totalidad". La mentada decisión se encuentra firme (cfr. fs. 150 y 164).

El 9 de diciembre de 2024, habiéndose cancelado la totalidad del plan al que se había acogido la empresa, la defensa efectuó una presentación por la que petitionó al tribunal que resuelva la extinción de la acción penal en los términos del art. 59 inc. 6to del CP o disponga esa misma decisión pero por aplicación del beneficio previsto en el art. 6 inc. "c" de la ley nro. 27.653 (cfr. fs. 154/157).

Con motivo de ello, el ARCA informó que las deudas con destino al Régimen Nacional de la Seguridad Social y al Régimen Nacional de las Obras Sociales, vinculadas a los hechos denunciados, se encuentran totalmente canceladas (cfr. fs. 166/167).

Finalmente, el 26 de marzo de 2025, el Tribunal Oral en lo Penal Económico nro. 3 dictó la resolución liberatoria ahora





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3

cuestionada. Para resolver así, consideró que "...se encuentra firme el pronunciamiento de este Tribunal mediante el cual se hizo lugar a la solicitud efectuada en los términos del art. 59 inc. 6 del CP -según ley 27.147- y se suspendió la acción penal seguida contra Ángel VÁZQUEZ y ANCERS. S.A. hasta tanto se abone la totalidad de las cuotas del plan de facilidades Nro. N807016 - 60 cuotas-, habiéndose cancelado el mismo en su totalidad, de conformidad con lo dictaminado por la Sra. Auxiliar Fiscal". Sobre la oposición de la querella al contestar la vista conferida, esgrimió que "...resulta una reedición de los argumentos planteados en la presente incidencia, siendo una cuestión zanjada mediante (el) pronunciamiento de suspensión de la acción penal de fecha 23 de diciembre de 2020 el cual se reitera se encuentra firme..." (cfr. fs. 177/181).

Contra esa resolución, la querella presentó recurso de casación en el que hizo pie en la imposibilidad de aplicar el instituto de la reparación integral a los delitos previstos en el Régimen Penal Tributario.

II. Relevadas las particularidades del caso, se plantea en la especie la revisión de una resolución que, conforme se expone a continuación, carece de una debida fundamentación (cfr. art. 123 del CPPN) y que no puede ser confirmada en esta instancia.

Viene al caso recordar que el 18 de junio de 2015, mediante la ley nro. 27.147 se incorporó al Código Penal de la Nación una nueva causal de extinción de la acción penal. El artículo 59 inc. 6 del CP establece "La acción penal se extinguirá: ...6) Por



conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes".

A partir de la resolución nro. 2/2019 del 13 de noviembre de 2019, la Comisión Bicameral de Implementación del Código Procesal Penal Federal del Honorable Congreso de la Nación puso en funcionamiento diversas normas que se vinculan con la solución de conflictos, criterios de oportunidad y revisión (como ser los artículos 22, 31 y 34 del CPPF). Sin perjuicio de que a partir de la mentada resolución se consideró superada la discusión relativa a la operatividad de esta nueva norma penal, corresponde advertir que ninguna de las disposiciones del nuevo Código Procesal Penal Federal regula específicamente las condiciones necesarias para aplicar el instituto de la reparación integral. Existe una laguna legal sobre su específico alcance, pues la ley no sujeta su aplicación a ningún requisito formal, material o temporal.

Ante la ausencia de regulación, la jurisprudencia ha ido delineando pautas de interpretación para la correcta aplicación del instituto en cuestión, a fin de evitar que esta nueva causal de extinción de la acción penal implique la desincriminación genérica de conductas penadas por la ley de fondo.

Así, se sostienen diversos criterios en punto a los delitos que puede involucrar, el significado que asume en cada caso particular la reparación integral del daño y, en especial, la relevancia que cabe otorgar a la opinión de la víctima y el Ministerio Público Fiscal interviniente (cfr. CFPP, Sala III, causa FPA 11010013/2012/TO1/CFC1, *Funes, Julio César y otros*, Sala III, rta. el 26/6/25, reg. 641/2025; Sala I, FBB 8802/2017/TO1/CFC1, *Gourgenidze, Alan s/recurso de casación*, rta. el 27 de junio de 2018, reg. 597/18; y Sala IV, CCC





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3

25020/2015/TO1/CFC1, Villalobos, Gabriela Paola y otros/defraudación, rta. el 29 de agosto de 2017, reg. 1119/17).

Partiendo de los lineamientos sentados en los precedentes señalados *ut supra*, considero que asiste razón a la parte querellante en cuanto a la imposibilidad de aplicar el instituto de la reparación integral al *sub examine*.

Pues no todos los delitos que legitiman la intervención penal del Estado producen consecuencias que puedan ser reparadas por el autor. Hay supuestos en los que el daño causado no es únicamente patrimonial y no puede ser reconducido hacia una o más víctimas particulares, sino que es la sociedad en su conjunto la que aparece como damnificada, resultando ajena en estos ámbitos la posibilidad de extinguir la acción penal mediante una reparación integral.

En relación al delito aquí imputado, antes que ahora, sostuve la imposibilidad de aplicar el instituto de la reparación integral a los delitos previstos en el Régimen Penal Tributario. Ello, en tanto resulta inconciliable con las condiciones expresamente establecidas por ese régimen especial para la extinción de la acción penal por pago, de conformidad con lo resuelto en diversos precedentes (cfr. CFCP, Sala II, causa nro. CPE 1827/2016/TO2/3/CFC2, Zille SRL y otros s/ recurso de casación, rta. el 28 de diciembre de 2020, reg. nro. 2288/20; Sala I, causa nro. CPE 1930/2012/TO2/5/CFC2, López Da Silva s/ recurso de casación, rta. el 9 de mayo de 2023, reg. n° 428/223; y Sala III, causa nro. CPE 575/2009/TO1/CFC4, Matisic, Ricardo



s/recurso de casación, rta. el 28 de noviembre de 2024, reg. nro. 1554/24, entre otras).

En el caso, los jueces sentenciantes se limitan a afirmar que la resolución que suspendió la acción penal en los términos de la reparación integral se encuentra firme y que se canceló el plan de pagos al que se acogió la contribuyente, sin tomar en consideración la oposición fundada de la querella y el impedimento de aplicar ese instituto al delito investigado. Soslaya, asimismo, que ese tipo de decisiones -suspensión de la acción penal en los términos del art. 59, inc. 6, del CP- no se encuentra prevista legalmente.

Por su parte, considera determinante el dictamen fiscal por el cual se postuló hacer lugar a la reparación integral, sin perjuicio de que resultaba evidente que éste no logra superar el test de logicidad, legalidad y razonabilidad requerido por el art. 69 del CPPN.

Las particularidades del caso antes expuestas impiden convalidar la resolución sometida a revisión. Recuérdese que, por un lado, el 23 de diciembre de 2020 se hizo lugar a la reparación integral solicitada hasta tanto se cancele el plan de pagos al que se acogió la empresa, y por el otro, el 26 de marzo de 2025, se declararon extinguidas las acciones penales seguidas contra los imputados y sus sobreseimientos en virtud de haberse cumplido con la cancelación de aquel plan.

En el *sub examine* la decisión impugnada se integró por dos pronunciamientos, dictados por el mismo órgano, en diferentes oportunidades, sin que ello encuentre fundamento en alguna disposición legal. A diferencia del procedimiento establecido para la suspensión del juicio a prueba o la conciliación, en el





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3

código procesal penal federal, en los supuestos de reparación integral del daño la normativa establece que se producirá la extinción de la acción penal, lo que habilita el dictado del sobreseimiento del imputado, conforme lo establecido por el art. 336 inc. 1 del CPPN. Es en el preciso momento en el que se repara integralmente el daño causado cuando se debe analizar la viabilidad de su aplicación y el cumplimiento de los requisitos propios al caso concreto. En atención a ello, la resolución previa que sólo suspendió la acción penal en los términos de la reparación sin dictar un pronunciamiento definitivo o equiparable a tal no puede haber causado estado.

III. Ahora bien, dado que las decisiones de esta Cámara deben atender a las circunstancias existentes al momento de su pronunciamiento (cfr. Fallos: 312:555; 315:123; entre otros), cabe aquí tener en consideración que la deuda con destino al Régimen Nacional de la Seguridad Social fue totalmente cancelada en el marco de un plan de pagos en los términos de la ley 27.541 (según ley nro. 27.562) y que los importes adeudados al Régimen Nacional de las Obras Sociales, vinculadas a los hechos denunciados, se encuentran totalmente cancelados con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley nro. 27.653. Esa circunstancia, de conformidad con el criterio establecido en diversos precedentes (cfr. causa nro. CPE 245/2020/2/CFC1, *Leadcam S.A. s/recurso de casación*, reg. nro. 1050/23.4, rta. el 9 de agosto del 2023, entre muchas otras) habilitaría la posibilidad de aplicar los beneficios establecidos por la ley nro. 27.541 y sus modificatorias, siempre y cuando se comprueben



los requisitos establecidos por la norma y las respectivas reglamentaciones, lo que debería ser materia de análisis por parte del a quo.

Al respecto, cabe destacar que la querella no opuso reparos a que se aplique al *sub examine* el beneficio de moratoria previsto en la ley nro. 27.653, planteado de modo subsidiario por la defensa dado que *"la deuda se encuentra totalmente cancelada antes de la entrada en vigencia de la ampliación estatuida por (esa) Ley..."* (cfr. fs. 169/172).

Incluso, también podría evaluarse la posibilidad de que haya operado en el caso concreto y de pleno derecho lo dispuesto por el art. 5º, tercer y sexto párrafo, de la ley nro. 27.743, publicada el 08 de julio de 2024. En esa norma se estableció: *"También quedará extinguida de pleno derecho la acción penal respecto de aquellas obligaciones que hayan sido canceladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen en la medida que no exista sentencia firme a dicha fecha (...) En el caso de las obligaciones y recursos de la seguridad social, la cancelación total -de contado o mediante plan de facilidades de pago- de los aportes y contribuciones producirá la extinción de la acción penal sin perjuicio que los aportes y contribuciones con destino al Sistema Nacional de Obras Sociales no se encuentren regularizados"*. El único requisito de procedencia para que se pueda extinguir la acción penal frente a la situación regulada por la norma referida es la falta de verificación de una sentencia firme.

En atención a ello, por las particularidades del caso, coincidiendo con el colega que inaugura el orden de votación en cuanto a la imposibilidad de aplicar al *sub examine* el instituto





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3

de la reparación integral, con las precisiones efectuadas, adhiero a la solución propuesta de hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte querellante ARCA (ex AFIP), sin costas, casar y anular la resolución recurrida y remitir las actuaciones al tribunal de origen para que se continúe con la sustanciación del expediente en los términos apuntados (arts. 470, 530 y ccds. del CPPN).

Por ello, en mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal, por mayoría,

RESUELVE:

HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la letrada apoderada de la querella (ARCA), sin costas, **ANULAR** la sentencia puesta en crisis y **REMITIR** las actuaciones al tribunal a quo a fin de que se continúe con la sustanciación del expediente en los términos apuntados.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

